

Corrupción Política
en
América Latina

CAPÍTULO TERCERO

BRASIL: EL “IMPEACHMENT” DE COLLOR DE MELO

Ética y política

En la caída de Collor de Melo, la lucha contra la corrupción desempeñó un papel central. Sin embargo, es necesario ver que es un factor dentro de un proceso más amplio de lucha política. “La tesis corriente de este derrumbamiento es que su caída se dio como consecuencia del nivel de corrupción en que el protagonista estuvo envuelto o como simple consecuencia de la crisis económica ya insustentable... Reconozco la importancia de los dos factores anteriormente mencionados; pero creo más que el derrumbamiento del gobierno de Collor resulta de la trama de fuerzas suscitadas por los actores involucrados.” “El proceso de renuncia-impeachment no es un fenómeno moral, es un proceso más político que económico.”¹

El paradigma es claro: “una crisis del régimen..., por el ascenso al primer plano del candidato Lula, tendió a transformarse en una crisis de dominación social o de hegemonía” del poder tradicional, lo que hubiera creado condiciones para un reordenamiento político. Con ello, la tendencia a la liberalización de la economía podría haber encontrado serios obstáculos. “Frente a esto, todas las diferencias previas (en la primera vuelta) en el

1 PINHEIRO DO NASCIMENTO, Elimar, *Adiós señor Presidente! Análisis del proceso político de la renuncia de Collor de Melo*, Revista Ecuador Debate, #33, CAAP, Quito, diciembre 1994.

sector anti-Lula, que eran enormes, desaparecieron para constituir un bloque absolutamente heterogéneo de fuerzas sociales y políticas que recurrieron a todos los recursos para evitar su derrota.”² Collor actuará como figura de transición para conjurar el peligro de la izquierda; pero luego será recambiado por una alternativa más orgánica.

La figura de Collor de Melo

La crisis política que se manifestó en “el desgaste de las instituciones, la pérdida de la credibilidad de la política y los políticos”, después del largo interregno del gobierno de José Sarney y del descalabro de la “Nueva República”, “preparó el camino para una campaña y un candidato mesiánico y triunfalista”³

Esta figura sale de las filas de la oligarquía nordestina de Brasil. La clase política tradicional y el “stablishment” se organizan en torno a la figura del gobernador de Alagoas, Fernando Collor de Melo. Catalogado como “un hombre arrogante, egocéntrico y con ímpetu imperialista, su discurso de joven moralizador y modernizador correspondía a las necesidades de desmontar un esquema intervencionista e impulsar una apertura económica inaplazable.”⁴

Durante la campaña, los medios de comunicación, a pesar de conocerlos, silencian los antecedentes de Collor. “El estilo de gobernar de Collor se forjó al calor de una personalidad todopoderosa, creada en la impunidad, en el hábito de la transgresión de la ley, sin consecuencias negativas para su autor. La droga, las orgías, los desmanes, son componentes importantes en el período de su formación, los conflictos familiares también”. A pesar de ser un alagoano que inició su vida política en Alagoas, fue formado y “es hijo de Brasilia. Pero de la Brasilia de la impuni-

2 DE OLIVEIRA, Francisco, *Fernando Collor de Melo. Perfil de un prestidigitador*, Revista Nueva Sociedad #118, julio 1991.

3 DE OLIVEIRA, F., Op. Cit.

4 Revista Semana, Nº 544, octubre 6-13 de 1992, p.85. Cit por. Rafael Ballén, *Corrupción Política*, Ed Acrópolis, Bogotá, 1994, p.60.

dad, del autoritarismo... la prepotencia de los miembros de la juventud dorada y de las “señoras dueñas del mundo”⁵

Silencian también los problemas de corrupción que se dieron en el ejercicio de la Gobernación y más bien presentan a Collor como el adalid de la lucha contra la corrupción: “Ya antes de la victoria de Collor hubo indicios de corrupción en torno al candidato... En aquel momento, sin embargo, los deslices de la campaña eran relegados a un segundo plano en función de intereses mayores”⁶. “Durante la etapa electoral que llevó a Collor a la presidencia... el diario *O Estado de Sao Paulo* y la *Red Globo* de televisión evitaron que el pasado de corrupción de Collor como Alcalde de Maceió, la capital del estado de Alagoas, se divulgase y lo perjudicase en los comicios. Durante la campaña los empresarios de los medios se sentían amenazados por la candidatura del sindicalista y diputado del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio “Lula” da Silva”.⁷ Los medios de comunicación y, en particular la *Red Globo* de televisión, propiedad de un amigo del padre de Collor, serán uno de los fabricantes del fenómeno Collor.

El discurso

Aquí se da un elemento que se repetirá en los demás casos en América Latina: el discurso anticorrupción se convierte en uno de los ejes de campaña: la clase política reconoce la demanda social y la absorbe como fuente de control electoral.

Collor de Melo, triunfa en la primera vuelta con un discurso de “arremetida contra el sistema político-partidario, ... denunciando a los corruptos, las lacras sociales identificadas no desde el ángulo de la desigualdad en la distribución de la renta y de la

5 PINHEIRO DO NASCIMENTO, E., Op. Cit.

6 LATTMAN-WELTMAN Fernando, Plinio de Abreu Ramos y José Alán Dias Carneiro, *Construcción y abandono de un buque defectuoso*, Revista Chasqui, #44, CIESPAL, Quito, enero 1993.

7 DE CASTRO, Rondón, *¿Renacimiento espiritual en los medios brasileños?*, Revista CHASQUI #44, CIESPAL, enero 1993.

violencia del proceso de acumulación, sino desde el punto de vista de la ineficiencia del Estado”.⁸ Collor realizaba contundentes declaraciones de que volvería a implantar la moralidad pública en el país prometiendo acabar con los “marajás”.⁹

Se configura un discurso que combina la lucha contra la corrupción con la modernización del Estado: “Voy a romper en Brasil el ciclo de impunidad administrativa que impide la modernización del aparato estatal. Pondré a los corruptos tras las rejas”¹⁰ Collor se presenta además como el “enemigo número uno” del Presidente José Sarney y de los partidos políticos en general. En definitiva, un candidato “anti-sistema”, a pesar de todos los cargos que había ocupado y con una imagen política favorable en el clima reinante.¹¹

“Un discurso que sintonizaba a la par con el empresariado y con la opinión pública “moderna”, mas de una manera *out side*... En los componentes neoliberales de su discurso dirigido a los grandes empresarios afirmaba sus deseos de restringir el Estado, fortalecer el campo del sector privado, insertar al país en el primer mundo, atraer las inversiones extranjeras. En su estilo violento antiélite, los pobres indigentes del país parecían encontrar su defensor: un líder rico, joven y poderoso contra las élites perversas”

Desde un discurso mesiánico logró convocar el apoyo de los sectores más pobres desorganizados. Pero además desarrolló dos contenidos que le garantizaron la captación del voto: “el de la **moralidad pública**, prometiendo persecución a los “marajás”, de fácil repercusión entre los miembros de los sectores medios urbanos, y el de la **modernidad** anunciando la privatización y la apertura al comercio internacional, de positiva repercu-

8 DE OLIVEIRA, F., Op. Cit.

9 CEDEAL, *Brasil. Situación política y social*, Revista SITUACION LATINOAMERICANA #13, octubre 1992.

10 Citado por RIOFRIO, Fabiola, *Collor: en el ojo del huracán*, El Comercio, Domingo 6 septiembre 1992, p. B-7.

11 PINHEIRO DO NASCIMENTO E., Op. cit.

sión para los acreedores internacionales y los empresarios.”¹² Logró el 28% de los votos, con lo cual pasó a la segunda vuelta para enfrentar a Lula da Silva.

“La segunda vuelta electoral fue un verdadero conflicto de clases, expresado electoralmente en las formaciones que se alinearon en torno a los dos candidatos (Collor y Lula)”¹³. Collor triunfa y conjura el peligro del P. T.

El desgaste del poder

En el poder se destapa la real naturaleza de Collor y su grupo, recubierta por una hábil campaña de marketing político que estuvo encabezada sobre todo por la Red *Globo* de televisión.

Adopta las primeras medidas económicas, las cuales fracasaron antes del primer año de gobierno. Para 1992, si bien hubo un leve crecimiento de las inversiones extranjeras y el nivel de la reserva era de 10 billones de dólares, el país se encontraba con un índice de crecimiento negativo en el orden del 1%, hubo una recesión en el ingreso de la renta per cápita de cerca del 10% y una inflación de 1174,47%.¹⁴

El discurso mesiánico había creado expectativas para el gran ajuste de cuentas. Inicialmente maneja un estilo “populista” de relación directa líder-masa, de menosprecio de las instituciones y de una definición ambigua del enemigo (las élites). Pero progresivamente Collor restablece el acuerdo con las fuerzas tradicionales en torno a un programa neoliberal; lo que comienza a configurar la resistencia de la gente.

Al mismo tiempo, aunque el régimen cuenta con el apoyo de los sectores empresariales, éstos mantienen un distanciamiento con el Presidente y más bien respaldan la gestión de su ministro de

12 Revista *Veja*, 15 noviembre de 1989.

13 DE OLIVEIRA, F., Op. cit.

14 *Gazeta Mercantil*, 31 diciembre de 1992.

economía: en el momento más álgido de la crisis, “la encuesta entre empresarios señala que el 35% de los entrevistados apoya al presidente (frente al 12% en la población en general); mientras, que el 94% manifiesta su apoyo al ministro de economía y el 71% apoya la línea adoptada en la política económica”¹⁵ El fracaso de esta política, particularmente en el control de la hiperinflación, ahondará las distancias con los empresarios, que no se jugaron por un apoyo total al presidente, aunque tampoco movieron su destitución. En este sentido, Collor de Melo sirvió más como una figura de transición, para evitar el peligro petista y el riesgo de una crisis de hegemonía y permitió a los partidos ganar tiempo para rehacer el tejido de control electoral para levantar un candidato más orgánico como Fernando Henrique Cardoso.

La búsqueda de una mayoría parlamentaria se ve dificultada no sólo por la actitud autoritaria de Collor, sino también por la dispersión de las fuerzas políticas. Finalmente establece un acuerdo sobre todo con el PFL, de derecha; aunque esto no evitará la debilidad del Gobierno dentro del parlamento.

La fragilidad parlamentaria y las contradicciones de la política económica, inician el desgaste del régimen.

La corrupción

Sin embargo, el detonante para la crisis fueron las denuncias de corrupción: “desde el inicio de su mandato en marzo de 1990, el Gobierno de Collor de Melo ha sido acusado en diversas ocasiones de prácticas irregulares, sin embargo, éstas afectaban a asesores y colaboradores del presidente”.¹⁶ Entre los acusados estuvo su propia esposa.

La crisis se agudiza cuando las denuncias afectan a la cabeza: a mediados de mayo de 1992 “el hermano del presidente, Pedro

¹⁵ CEDEAL, Revista SITUACION LATINOAMERICANA#10, Agosto 1992.

¹⁶ CEDEAL, Op. cit. #10.

Collor de Melo, acusó al empresario Paulo César Farías, “PC”, de haber montado una red de tráfico de influencias en el gobierno federal. Las acusaciones alcanzaron al presidente en la medida en que Paulo César Farías contaba con el apoyo del presidente y actuaba como su “testaferro”.¹⁷

Tal como lo señalamos en el primer capítulo, la corrupción no es un asunto de actuación individual; más bien se establece una red, que tiene raíces profundas en el poder y que encuentra un “pivote”, en personajes como PC Farías: el informe de la Comisión Parlamentaria señala que Farías “se asoció con distintas personas con la confluencia de voluntades para cometer delitos”. No se trata tampoco de la actuación únicamente de los funcionarios públicos; hay una profunda imbricación entre poderosos intereses privados y la actuación de los funcionarios: El Director General de la Policía, Amauri Galindo, después de analizar los diskettes de la contabilidad paralela de Paulo César Farías, señala que “el dinero depositado por titulares de cuentas bancarias “fantasmas” ligados a PC Farías en las cuentas bancarias destinadas a pagar los gastos personales del presidente -6.5 millones de dólares en dos años- provino de sobornos pagados por empresas constructoras beneficiadas con informaciones privilegiadas”

Aquí hay un factor clave para entender el proceso: hay una ruptura dentro del bloque dirigente. El detonante es el “mal gerenciamiento del esquema de corrupción”: “En Brasil existe una larga experiencia en el montaje y gerencia de vastas redes de corrupción”. En el caso de Collor fracasa este “gerenciamiento” debido al “exceso de prepotencia y de ganancia, junto a la inexperiencia”. Desde los primeros meses se dio “un brutal aumento de los porcentajes exigidos por el gobierno para contratos, excediendo el tradicional 10% hasta niveles del 30 % o 40%, aparte de una mucho mayor agresividad en este tipo de transacciones”.¹⁸

17 CEDEAL, Op. cit. #10.

18 CARVALHO, Carlos Eduardo, *Brasil. La caída de Collor*, Revista Nueva Sociedad #124, abril 1993.

Se combinan dos elementos: una disputa familiar y regional mal resuelta en torno al control de las comunicaciones en Alagoas, y que desemboca en la denuncia de Pedro Collor de Melo en contra de PC Farías; y la resistencia de los grupos de poder ya establecidos.

Al pertenecer Collor a un sector económico que no había accedido al mando directo del gobierno aunque había participado subordinadamente y en el ámbito regional en el poder, cuando logra el control de la administración, busca utilizarla para acelerar el tiempo de la reacumulación de capital en manos de su grupo. Esto genera niveles de resistencia dentro del propio bloque gobernante, sobre todo de los sectores tradicionales que habían logrado sistematizar una corrupción socialmente “aceptable”. Aquí hay un paralelismo con el caso de Bucaram en Ecuador.

El Congreso se convierte en el espacio decisivo del proceso: instaura una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), solicitada por Eduardo Suplicy, Senador, y José Dirceu, Diputado, ambos del PT. Inicialmente el Gobierno mantiene la mayoría, aunque posteriormente disputas por razones regionales con un Senador oficialista, llevará a que éste renuncie al puesto en la CPI, entregándolo al Senador José Bisol, candidato a la vicepresidencia en la lista de Lula: la oposición logra una mayoría decidida a proseguir las investigaciones. Cuentan con la acción firme del Movimiento por la Ética en la Política (MEP) de un sector de la prensa escrita y la policía federal.

Sin embargo el trabajo de la CPI no era tomado muy en serio por las fuerzas políticas tradicionales. Todos los antiguos líderes políticos se oponían al proceso. “Temían todos que la cuestión terminase en un golpe militar. También la mayoría de los gobernadores se pronunciaban contra la CPI”¹⁹

Pero hay un hecho imprevisto que cambia el curso de los acontecimientos: el chofer de Collor, Eriberto Franca, declara ante la

19 PINHEIRO DO NASCIMENTO E., Op. cit.

Revista *Isto E* que efectivamente recibía dineros de PC Fariás para el Presidente Collor. El 1º de julio de 1992 ratifica sus denuncias ante la CPI, en una sesión televisada a todo el país (TV Bandeirantes). Esta declaración “desencadena una serie de movimientos que cambian la relación entre los dos campos adversarios.”²⁰ Además, abre pistas para la investigación de las relaciones entre la red PC Fariás y el presidente: se establece la entrega de más de 6,5 millones de dólares al Presidente y su familia y se comprueba, a través de las investigaciones de las cuentas telefónicas de PC Fariás, la relación de la red con los diferentes ministerios, el Banco del Brasil, la Caja Económica Federal y la Presidencia de la República. La política no es un proceso determinista: la actuación de los individuos y de los actores sociales puede influir en la perspectiva.

Los medios de comunicación empiezan a involucrarse lentamente, en primer lugar la prensa, particularmente las Revistas semanales *Veja* e *Isto E* y los dos grandes diarios influyentes, la “Folha de Sao Paulo” y “O Estado de Sao Paulo” hasta que en el proceso se incorporan, sobre todo en la parte final, las cadenas de televisión. “En un movimiento gradual y continuo, la prensa abandonó el navío y pasó a dirigir su hundimiento”²¹. Paradójicamente, los media que contribuyeron a crear la figura de Collor, al final apoyaron a su destitución.

La ciudadanía empieza a movilizarse. La democracia generalizada en el Continente se torna en uno de los ambientes favorables para la ampliación de la lucha contra la corrupción. Aunque la reacción se da en primer lugar contra las medidas políticas del régimen, esta dinámica nos lleva a un elemento clave en el proceso anticorrupción en América Latina; la reacción se realiza ante la implantación del modelo neoliberal pero se torna explosiva cuando se combina con la lucha contra la corrupción. El paso a una nueva forma de funcionamiento de la economía y la política crea condiciones para la entrada de nuevas formas de corrup-

20 PINHEIRO DO NASCIMENTO E., Op. cit.

21 LATTMAN-WELTMAN F. et al., Op. cit.

ción, pero también marca la irrupción de actores sociales con una sensibilidad crítica ante la actuación de los políticos con una sensibilidad especial frente a la inequidad de su forma de vida.

La caída de Collor, y esto se repetirá en los demás casos en América Latina “debe acreditárselo en gran medida, a la intensa movilización de la sociedad, expresada en las mayores manifestaciones callejeras ocurridas desde la campaña de 1984 a favor de las elecciones presidenciales directas. Pese a ser intensa, sin embargo, la presión popular carecía de condiciones para retirar a Collor del Gobierno. Basta señalar que el movimiento ganó las calles *después* de que la CPI fuera instalada.”

Recordemos algunos hechos: el 16 de agosto de 1992 fracasa el llamado de Collor para que “su gente” demuestre la adhesión al Gobierno en las calles, luciendo los colores verde y amarillo de la bandera brasileña. En lugar de ello millones de brasileños acataron la exhortación de la oposición de lucir símbolos de color negro para pedir la renuncia del presidente. Dos días después, el 18 de agosto, los partidos aliados a Collor rompen filas y los legisladores hasta entonces oficialistas comienzan a manifestarse en favor del enjuiciamiento del presidente.²²

La caída

En la caída de Collor, como en los otros casos que analizaremos, confluyen dos procesos: la movilización ciudadana y la acción institucional, sobre todo de los parlamentos. Sin un quiebre del bloque gobernante no había posibilidad de la caída de Collor. Esta situación, al igual que en el caso de Carlos Andrés Pérez en Venezuela o de Abdalá Bucaram en Ecuador, muestra que la lucha contra la corrupción se mueve dentro de los límites del reordenamiento del poder, más que de un cambio del mismo, como se evidenciará en los desenlaces de estos procesos.

²² Cronología de los hechos en base a Diarios EL UNIVERSO y EL COMERCIO, varias fechas.

La participación de las fuerzas políticas es aún más lenta. La iniciativa parte de las fuerzas de oposición, particularmente el PT; pero progresivamente, Collor pierde el apoyo de todos los partidos aliados y “en la recta final estaban con el Presidente solo el gobernador de Bahía y líder del PFL (derecha “fisiológica”), Antonio Carlos Magalhaes, y el Gobernador de Río de Janeiro y presidente del Partido Democrático Laborista (PDT populista-centro), Lionel Brizola”.²³

Después del informe de la CPI señalando la responsabilidad del presidente, se abre un nuevo terreno de lucha en torno a lo jurídico. Como sucederá en el caso de Carlos Andrés Pérez y luego en el de Abdalá Bucaram, aunque la Constitución no se encuentra reglamentada en los artículos correspondientes, el proceso político abre el cauce de su aplicación y en el caso de Brasil se instaura el mecanismo del “impeachment”.

El Gobierno intenta mantener y ganar el apoyo de los diputados, sobre todo por medio de la entrega de partidas y préstamos. Sin embargo, la presión de la opinión pública y de la movilización ciudadana va en aumento.

Finalmente la votación por el “impeachment” de Collor en el Congreso, el 29 de septiembre de 1992, “superó todas las previsiones: 441 a favor, 38 en contra, 1 abstención y 23 ausencias”. Situación que se reforzó en la votación del Senado el 29 de diciembre: 76 votos por la separación de Collor y 3 en contra.²⁴

Debemos reconocer que la lucha contra la corrupción es la lucha contra el poder; pero éste logra finalmente encauzar esa lucha. Por ello, se da una confluencia entre la movilización ciudadana y la acción institucional. La sola movilización no logra el resultado de la destitución, como veremos en el caso de Venezuela, en donde dos intentos de golpe fracasan; pero al final se impone la decisión institucional del parlamento. Aunque las fuerzas

23 CARVALHO C.E., Op. cit.

24 CEDEAL, Op. cit. #13.

políticas, sobre todo parlamentarias, y la propia opinión pública, actúan sólo bajo la presión de la movilización ciudadana.

“Lo que permitió que la destitución del Presidente recibiera la mayoría de los votos de los diputados (muchos se pasaron a la oposición a último momento), no fueron directamente los medios de comunicación. Los medios lo hicieron indirectamente acompañando con su cobertura las grandes manifestaciones populares que se extendían del norte al sur de Brasil”²⁵

Este tipo de desenlace lleva a recortar los alcances de la lucha contra la corrupción. Finalmente el proceso contra Collor se ha ido diluyendo en las instancias judiciales. Y el recambio final se opera en un cambio de figura: Collor por Cardoso, a fin de garantizar la continuidad del modelo, desembarazado de las formas extremas de la corrupción; aunque las denuncias han vuelto nuevamente a afectar a la cabeza presidencial.

“El derrumbe de Collor fue el fin de un gobierno, pero no de la crisis que le permitió surgir. Al final, tal vez el mayor problema haya quedado de lado, porque antes de preguntarse por qué la “sociedad brasilera” destituyó a Collor, debería interrogarse por qué lo eligió”²⁶

Ahora Collor puede regresar para terciar como candidato a Senador. La justicia ha diluido el proceso. La lucha política contra la corrupción ha cumplido su propósito: permitió conjurar el peligro petista y ganar tiempo para un recambio político en el bloque dominante. Jugó el papel de una catarsis colectiva y luego vuelve el viejo tiempo del olvido.

25 ALVES D'AZEVEDO, *El pueblo decide*, extracto del trabajo *Brasil: Ascensão e queda de um presidente*, reseñado en Revista CHASQUI, #44, CIESPAL, Quito, enero 1993.

26 PINHEIRO DO NASCIMENTO E., Op. cit.

VENEZUELA: LA CAÍDA DE CARLOS ANDRÉS PÉREZ

Del Caracazo al intento de golpe

El tiempo se condensa en el acontecimiento. Al rebasar el orden representado, éste anuncia las tendencias. Muchas veces los resultados se ven después de que el acontecimiento desaparece de la visibilidad.²⁷

En febrero de 1989, apenas tres semanas después de asumir por segunda vez la presidencia, Carlos Andrés Pérez decretó un paquetazo de ajustes económicos, dentro del cual estaba la elevación del precio simbólico de la gasolina. “El anuncio provocó violentas manifestaciones populares, que *degeneraron* en tres días de disturbios y saqueos, que dejaron, según cifras oficiales, unos 300 muertos y pérdidas millonarias en locales comerciales”²⁸ El acontecimiento se conoció como el “Caracazo”.

Carlos Andrés Pérez, desde el mismo día que inició su segundo mandato, el 2 de febrero de 1989, lo hizo en condiciones adversas. La pérdida de su popularidad se da a partir de la situación económica, y, sobre todo, del tipo de política que aplica ante la crisis: elimina los subsidios e inicia un proceso de privatización, acorde con las recomendaciones de la política neoliberal.

Una fuerte reacción ciudadana se expresó en el “Caracazo”, el 27 de febrero. Aquí está la semilla para la caída de Andrés Pérez. Las expectativas ciudadanas por el triunfo de Pérez son frustradas. La imagen exitosa del primer mandato (1974-1979), asegura el respaldo electoral. “Carlos Andrés Pérez se ofreció como el hombre que sacaría a Venezuela de una crisis grave... Confiados en que se repetiría la bonanza de su primer gobierno

27 BADIOU, Alain, *¿Se puede pensar la política?*, Editorial Nueva Visión, Buenos Aires, 1990.

28 Revista 15 DIAS, Quito, 16 de enero de 1992. El subrayado es nuestro, para mostrar el tipo de lectura oficial de las movilizaciones sociales.

- fruto del dispendio de las rentas petroleras- el electorado volvió a elegirlo”²⁹ En forma prepotente, Carlos Andrés Pérez cree que puede manejar ese apoyo. Afecta la percepción simbólica de la bonanza y prosperidad, sobre todo en torno a la elevación del precio de la gasolina, símbolo de la época petrolera.

La pobreza afecta a la mitad de los venezolanos y “a ello se suman más de 5.000 escándalos de corrupción sin sentencia, en los que se han visto implicados miembros de la cúpula militar e influyentes dirigentes políticos”³⁰ “Casos de corrupción llenaban las páginas de los periódicos... Se calcula que aproximadamente el 30% del presupuesto se lo reparten directa o indirectamente, a través de las empresas del Estado, los políticos corruptos”. El propio Pérez logró sortear un juicio por presunta corrupción al acabar su primera presidencia en 1979.

Aquí, como en el caso de Collor de Melo y de Salinas de Gortari se combina “el fracaso de la gestión pública con la corrupción”³¹

Este descontento es recogido por un sector de militares. El intento de golpe de Estado del 4 de febrero de 1992, liderado por el Coronel Hugo Chávez se explica por el ambiente de corrupción y crisis económica que Venezuela vivía y cuya responsabilidad se le atribuía a Pérez.

“Los golpistas tenían el convencimiento que eran más perfectos que los demás en la sociedad venezolana, y que los dirigentes civiles de su nación eran estúpidos, corruptos y responsables de la crisis que ha venido sufriendo Venezuela (...) Su golpe era un ataque contra la corrupción, despilfarro y desorden que han llegado a caracterizar el sistema político venezolano”³²

29 PASARALuis, DESDE FUERA: *Ídolos caídos*, Revista Caretas, Lima, 1998.

30 Revista 15 DIAS, Op. cit.

31 PASARALuis, Op. cit.

32 Revista Semana, # 510, febrero 11.18 de 1994, pp.50 y 51. Citado por Rafael Ballén en “*Corrupción política*”.

La diplomacia internacional condena el intento golpista, en nombre de la defensa de la democracia. En el contexto internacional no había condiciones para una resolución extrainstitucional: tal como lo sustentamos la movilización social no logra resultados si no se combina con la acción institucional.

Las declaraciones realizadas desde 1991 por el escritor premio Príncipe de Asturias, Arturo Uslar Pietri, quien encabezaba un grupo de diputados independientes conocidos como “Los Notables”, advertían sobre un posible golpe de Estado, propiciado “por el pillaje que se ha venido penetrando en todas las áreas de la vida nacional (...) Aquí se ha logrado la ingeniosa circunstancia de permitir la libertad de que uno hable, pero ante la manera fraudulenta de manejar el Estado, no se ha hecho nada... hemos llegado a la extrema circunstancia de que los que todavía creen en la democracia son los pendejos”³³

Las movilizaciones sociales se sucedían una tras otra. “Una fiebre ataca a los pobladores desde las medidas adoptadas en el 89 la fiebre denominada “paromanía”, huelgas que se convirtieron desde entonces en el pan de todos los días de los venezolanos”³⁴ El sector más activo era el estudiantil.

Los manifiestos de los militares insurgentes recogían estas demandas y expresaban su intención de cambiar la sociedad venezolana comenzando con un “purificador” baño de sangre para los corruptos. Los militares rebeldes - sostenía un General retirado - son “un grupo más de venezolanos alzados. Estaban alzados los maestros, los médicos, los jueces, los estudiantes, los obreros. La diferencia estriba sólo en el modo de alzamiento”³⁵

La intentona golpista de febrero de 1992 fracasa y Hugo Chávez junto a un centenar de militares, son detenidos y van a la prisión

33 RODRIGUEZ, Tamara. “La Corrupción preocupa a los Venezolanos”. Diario HOY, 20 febrero 1992.

34 AGUIRRE, Milagros, *Las voces de la calle*, El Comercio, 1º de agosto 1993, p B11.

35 Declaraciones del General (r) Alberto Muller, ex-Contralor General de las Fuerzas Armadas, Diario HOY, Quito, 8 de febrero 1992, p 7A.

o al exilio. Sin embargo, este hecho y las diversas declaraciones realizadas en torno de las causas del mismo, permitieron poner sobre el tapete y en conciencia social, el problema de la corrupción y el franco deterioro de la autoridad del gobierno. “Cuanto menos, opinan analistas, el golpe socava la confianza en un gobierno, que para el 92% de la población -según las últimas encuestas de opinión hechas inmediatamente antes del conato golpista de la semana pasada- ha cumplido un pobre papel en el frente económico”.³⁶

Un sondeo de opinión realizado por la firma Penn and Schoen, a pedido del mismo gobierno luego del golpe, evidenció que la corrupción pasó a ser la principal preocupación de los ciudadanos venezolanos, por encima del alto costo de la vida, la falta de seguridad personal y el desempleo.

La corrupción

El 8 de noviembre de 1992, en una breve columna el periodista y ex-dirigente del Movimiento Al Socialismo (MAS), José Vicente Rangel, denuncia el manejo irregular de 17,2 millones de dólares de los fondos de gastos reservados o secretos de seguridad, manejados por el Ministerio de la Secretaría del Presidente. Posteriormente presenta el caso ante el Fiscal. Este asume su responsabilidad y oficializa ante la Corte Suprema de Justicia la acusación contra el Presidente y dos de sus Ministros, por fraude y malversación de fondos públicos.

La denuncia llevó a la Comisión de Contraloría de la Cámara de Diputados a designar el 17 de noviembre de 1992 una comisión especial de nueve miembros para investigar el caso³⁷.

La movilización social se intensifica; y el 27 de noviembre se realiza un segundo intento de golpe, encabezado por el Coronel Hugo Chávez, para desplazar a Pérez. Este segundo intento fra-

36 “Pobreza y Corrupción detonaron golpe en Venezuela según expertos” Diario HOY, 1 de diciembre de 1992.

37 Los datos están tomados de Diario HOY y Diario El Comercio, varias fechas.

casa nuevamente. Sin embargo, la sombra del Movimiento Bolivariano atravesará todo este período.

De acuerdo al informe final de la Comisión Especial, presentado en abril de 1993, el Presidente Carlos Andrés Pérez ordenó el 22 de febrero de 1989 aumentar en 250 millones de bolívares el presupuesto de gastos reservados del Ministerio del Interior; y dispuso que con esos fondos se compraran dólares en una oficina de Régimen de Cambio Diferencial (RECADI) que ofrecía la divisa a una tasa de 14,50 bolívares por dólar, mientras la tasa en el mercado era de 30 bolívares por dólar. El 12 de marzo de 1989 el Ejecutivo ordenó la eliminación de la RECADI, calificada por el propio Pérez como “un nido de corrupción”. Y, agrega el Informe de la Comisión parlamentaria, en el trámite para la compra de los dólares así como para su entrega, luego de la desaparición de la RECADI, hubo una serie de irregularidades que implicaban al Presidente, pues ni el Ministerio de la Secretaría de la Presidencia que maneja los gastos reservados, ni ninguno de los funcionarios pudo decir a qué se destinaron esos dólares.

“El caso RECADI constituye la expresión culminante del proceso de degradación moral de la Venezuela contemporánea. Tiene dos vertientes bien definidas: la de los comerciantes e industriales particulares que tuvieron los mayores beneficios de la gigantesca estafa a la nación; y la de los funcionarios públicos, de mayor o menor jerarquía, que fueron sus cómplices directa o indirectamente, por acción u omisión. Cabe resaltar la complicidad evidente del Banco Central de Venezuela que hizo posible la realización de la gigantesca estafa”. Después de la devaluación de 1983 se creó un sistema con cuatro tipos de cambio, incluyendo el mercado libre. La estafa se basaba en el manejo diferenciado de las tasas, de acuerdo a conveniencias políticas. “Durante su existencia RECADI contó con un presupuesto de US\$ 28,3 millones, pero otorgó permisos para divisas que correspondieron a US\$ 43,5 millones.”³⁸ Según la Revista Visión, el monto malversado alcanzó la cifra de US\$ 60 millones.

38 Diccionario de la Corrupción en Venezuela, Tercer Volumen.

La reacción contra Carlos Andrés Pérez condensa el rechazo ciudadano a todo este proceso de corrupción.

La caída

Paralelamente a la acción del Parlamento, la Corte Suprema de Justicia aceptó estudiar el caso y el 29 de marzo de 1993, su Presidente, Gonzalo Rodríguez Corro, señalado como miembro del Opus Dei y ex-militante de COPEI, se reservó el derecho de elaborar una ponencia del caso que debía ser resuelta por los 14 miembros de la Corte Suprema. El 20 de mayo de 1993, la Corte Suprema por mayoría de 9 votos contra 6 abstenciones, decide que había mérito para juzgar al Presidente. Los 6 jueces que se abstienen mantenían ligazones con el partido gobernante, la Alianza Democrática. El dictamen también implica al ex-Ministro de la Presidencia, Reinaldo Figueredo, y al del Interior, Alejandro Izaguirre.

Allí cambian las declaraciones internacionales: los voceros de los diferentes gobiernos declaran que “el juicio es un ejemplo para la democracia”. Controlada institucionalmente la lucha contra la corrupción, podía obtener su resultado.

Al día siguiente se reúne el Senado y decide por unanimidad dar paso al enjuiciamiento del Presidente, Carlos Andrés Pérez. Con ello, éste queda suspendido en su cargo y se posesiona interinamente Octavio Lepage, Presidente del Senado.

Se produce un largo debate jurídico en torno a la duración del gobierno de Lepage, pues hay vacíos constitucionales, que luego son llenados por decisión política. El Congreso finalmente nombra como Presidente transitorio a Ramón J. Velázquez, hasta que se realicen las elecciones.

Sin embargo, éste no es aún el desenlace. La Corte Suprema de Justicia decide también procesar al ex-Presidente Jaime Lusinchi, acusado por malversación de fondos de la partida de fondos secretos.

El sistema político y la economía continúan una crisis que aún no se resuelve. Triunfa en las elecciones Rafael Caldera, al margen de su partido original, el COPEI, y a la cabeza de una alianza heterogénea.

Pero finalmente el que triunfa es el Movimiento V República, encabezado por el Coronel Hugo Chávez. La imagen del acontecimiento, del “Caracazo” nuevamente se presenta. Ahora, con Chávez en la Presidencia habrá que ver si las perspectivas anunciadas de lucha contra la corrupción y de reformas económicas y políticas se realizan. El 96% de los ciudadanos venezolanos estima que la corrupción ha aumentado en los últimos años³⁹ por tanto constituye uno de los problemas básicos actuales. El camino está abierto hacia una Asamblea Constituyente que cambie la Constitución y sienta las bases de una nueva República.

MÉXICO: CRISIS POLÍTICA Y CORRUPCIÓN

Las sombras del fraude

Carlos Salinas de Gortari asume el gobierno en medio de un profundo proceso de desgaste: la debilidad con la que termina el gobierno de Miguel de la Madrid; la división interna del PRI, con la ruptura del cardenismo que se constituirá en el eje de la oposición de la izquierda y de la construcción del PRD; y las sobras del fraude electoral, afectaron profundamente la legitimidad del nuevo gobierno.

“Al iniciarse el sexenio salinista había un presidente cuestionado en su legitimidad, una Presidencia desgastada, una economía que no lograba repuntar los números rojos de falta de crecimiento y expectativas poco claras sobre el futuro del país y del sistema político”. “El origen del gobierno salinista fue complicado

39 TREVISARI, Paulo Jr, *Todos contra los corruptos*, Diario El Comercio, miércoles 24 de marzo de 1999, pág. D5

porque el resultado de las elecciones de 1998 nunca quedó claro y ninguno de los principales actores estuvo nunca satisfecho. El famoso fraude de 1998 quedó como una piedra de molino al cuello del presidente”.⁴⁰. El triunfo se dio apenas con el 50.4%.

Por ello, el objetivo de la primera fase del gobierno salinista fue ganar legitimidad sobre la base de una serie de acciones espectaculares, que impulsaran la popularidad del presidente, dentro de las cuales se ubica la lucha contra la corrupción.

La corrupción en México adopta formas muy profundas. No sólo se manifiesta en una cultura que atraviesa el conjunto de la sociedad, sino que afecta a las altas esferas políticas y se presenta en modalidades graves. En el terreno político los conflictos electorales llegan a niveles extremos de violencia: el PRD afirma que en el sexenio 1988-94 tuvo más de 230 asesinatos políticos de militantes.⁴¹

“La situación se complica cuando oficialmente se reconoce que los propios cuerpos policiales son parte del problema y no de la solución, al estar involucrados en los ataques a los propios ciudadanos y mantener vínculos con el crimen organizado”.

Respecto al narcotráfico, se estima que en el mercado nacional transita droga por un valor de alrededor de 25.000 millones de dólares, cantidad que reflejaría la capacidad del narco para erosionar la fibra central del poder del Estado”.⁴²

El discurso anticorrupción

“México fue un caso clásico de un país con un enorme nivel de corrupción, donde cada presidente asumía prometiendo contro-

40 AZIZ, Nassif, Alberto. En: México en el despilfarro: *Los años de Salinas*, Juan Pablos Editor, Facultad de Ciencias Sociales, México 1997, pp. 60 y 68

41 AZIZ, Nassif, A., Op. cit. p. 72

42 AGUILAR, Oscar y DUSSEL, Enrique, *México: Restos políticos y económicos*, Revista Nueva Sociedad, N° 159, Caracas-Venezuela, enero-febrero

larla y terminaba convertido en el mayor sospechoso de la historia. Salinas de Gortari, al comienzo de su gestión, dio muestras de una decisión que hacía pensar en que por fin se iba a realizar un cambio en serio”.⁴³

Los juicios y posteriores capturas de importantes figuras de la sociedad mexicana, generaron la imagen que en realidad la lucha contra la corrupción sí iba a tener proyecciones.

En enero de 1989, cuarenta días después de haber iniciado el sexenio, el ejército aprehende a uno de los líderes sindicales más poderosos, Joaquín Hernández Galicia (la Quina), acusado de hechos de corrupción.

En marzo de 1989, la Procuraduría General acusa a cuatro figuras de la industria del corretaje de valores, las mismas que fueron detenidas y acusadas de “negociación ilícita de valores”. Entre los acusados se encontraba Eduardo Legorreta Chauvet, quien fuera administrador de la campaña política de Salinas y que asomaba como amigo personal del Presidente.

En el mes de abril, se dan nuevas detenciones importantes: del número uno del narcotráfico Miguel Ángel Félix Gallardo, del Jefe de Policía y unos 600 militares de la ciudad de Culicán, del Jefe de la Policía Judicial de Jalisco, del Jefe de Policía Federal de México.

En Junio de 1989, como resultado de la investigación sobre el asesinato en 1984 del periodista Manuel Buendía, es detenido José Antonio Zorrilla Pérez, Jefe de la Dirección Federal de Seguridad, acusado de ser el autor intelectual directo, con el objetivo de evitar denuncias sobre sus relaciones con el narcotráfico.

Estas medidas, inscritas en la necesidad de relegitimar el gobierno de Salinas y el papel del PRI, generaron impacto social inmediato. Como resultado de sus primeras acciones contra la

43 MORENO Ocampo, L, Op. cit.

corrupción, Salinas logró que su popularidad subiera al 80% en abril del 89. A esto hay que sumar que durante el gobierno de Salinas se removieron a más de la mitad de los gobernadores y se colocó interinos.

Sin embargo, los movimientos espectaculares del salinismo, sobre todo los de tipo político, muy pronto mostraron que su alcance era limitado y que sus efectos no lograban crear nuevos pisos institucionales, ya que casi durante todo el sexenio se repitieron los viejos círculos viciosos (de la política mexicana)”. “El salinismo fue un gobierno con fuertes apoyos (temporales), pero con la fragilidad que da el consenso que viene de actos de gobierno de alcance muy temporal, es decir, sólo para el corto plazo”.⁴⁴

Esta imagen positiva del gobierno comienza a desvanecerse por ciertos hechos. El caso de actividades ligadas a la recolección de fondos para la campaña del PRI, llevó a preguntarse a los ciudadanos mexicanos sobre la profundidad de la lucha contra la corrupción. “El 23 de febrero de 1993 se realizó una comida con el Presidente Salinas, en la misma que el cubierto costaba 25 millones de dólares, pero Emilio Azcárraga, dueño de Televisa (cuya fortuna según la revista Forbes es la más grande de América Latina), dijo que pagaría 75 millones”...Los partidos opositores argumentaron que “...el partido oficial podía recaudar 800 millones de dólares en una noche porque los empresarios que se los ofrecían obtenían mayores beneficios por otras vías”⁴⁵

Las acciones realizadas por Salinas no significaban modificar y resolver las causas estructurales de la corrupción: la relación entre quienes tienen la autoridad y quienes tienen el dinero. La lucha anticorrupción se mueve en el ataque a líderes sindicales desgastados y a políticos menores sin legitimidad.

44 AZIZ, Nassiff, Op. cit.

45 MORENO Ocampo, L, Op. cit.

La red Salinas

Los problemas se agravan sobre todo en el último año del mandato. 1994 fue uno de los más violentos de la historia democrática de México: “en unos pocos meses hubo una clara línea de violencia política que cruzó el asesinato del cardenal Posadas Ocampo, pasó por el secuestro del banquero Alfredo Harp, tuvo su momento más incierto en el asesinato de Luis Donaldo Colosio y unas semanas después de la elección concluyó con el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu.”⁴⁶

Las sombras llegan con el asesinato de Donaldo Colosio. El 23 de marzo de 1994, en Tijuana, fue asesinado el candidato del PRI a la Presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio, “en el momento en que su campaña entraba en una ruta de claro despegue y sus ofertas de cambio con certidumbre adquirirían contornos creíbles para un público no priísta, ávido de ofertas de futuro”.⁴⁷

Las acusaciones llegan a implicar al propio hermano del asesinado y afectan al presidente Salinas de Gortari, aunque las investigaciones no lograron concretar las vinculaciones.

El 6 de enero de 1995, Carlos Salinas de Gortari es acusado por los 70 diputados del PRD por hechos de corrupción.

El 28 de febrero es detenido el hermano, Raúl Salinas de Gortari y es encarcelado en Estados Unidos. El ex-presidente sale de México el 12 de marzo, y deja con ello un aire de fuga ante las responsabilidades. El 11 de julio la hermana, Adriana, es acusada como sospechosa de mantener negociaciones con el narcotráfico.

La violencia sigue presente: el 19 de junio de 1995, Abraham Polo Uscanga, quien tenía pruebas de la corrupción en México, es asesinado.

46 AZIZ, Nassiff, Op. cit. p. 82

47 Revista SITUACION LATINOAMERICANA, # 20.

Las investigaciones continuaron y se logran algunas pruebas. La publicación a fines del 95, de una vieja carta, que reveló severas discrepancias con Luis Donaldo Colosio, proyectó una sobra de duda sobre la ninguna vinculación de Carlos Salinas con el asesinato del candidato del PRI.⁴⁸

El 15 de noviembre de 1995, las autoridades suizas detienen a Patricia Paulina Castañón, ex reina de belleza y esposa de Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex -presidente Carlos Salinas, por intentar retirar 83.9 millones de dólares de una cuenta mantenida bajo nombre falso. El informe de la Procuradore General de Suiza, Carla de Ponte, señala: “una investigación de la policía judicial se lleva a cabo sobre varios ciudadanos mexicanos, por actividades ilegales para el financiamiento del tráfico de drogas y el lavado de dinero procedente del narcotráfico”⁴⁹ Según las autoridades sería dinero que Raúl Salinas recibía por la protección de embarques hacia Estados Unidos.

De su lado, el Procurados General de México, al informar sobre el caso afirmó que “Raúl Salinas acumuló una fortuna cuando trabajaba en el gobierno, incluyendo su último cargo como director de un programa contra la pobreza, durante el mandato de su hermano”.

Según la declaración del Procurador, “entre 1991 y 1992, cuando Carlos Salinas era Presidente, Raúl Salinas realizó depósitos no declarados en varias cuentas por 22.300 millones de pesos, o unos 7.140 millones conforme la tasa de cambio vigente entonces. Salinas acumuló 21 propiedades durante el mandato de su hermano y mandatos anteriores. Ello elevó el total de propiedades a 39”.

48 El Comercio, lunes 1º de enero de 1996, p. 10

49 Las informaciones están tomadas de NUSSER, Nancy, *Arresto de cuñada de Salinas añade Escándalo en México*, Cox New Service, 1995. Golden-tim, Salinas tenía 90 millones de dólares del narcotráfico, dicen suizos, Times New Service, octubre, 1998.

Las autoridades suizas solicitaron formalmente a las autoridades de Gran Bretaña que incauten 23.4 millones de dólares más depositados en bancos de ese país.

Todo ello muestra que en el proceso de degradación de la política mexicana, y del PRI, Salinas encontró amigos que actuaron con más eficacia que sus enemigos. La red toma como base la familia del presidente. Un proceso similar se da en el caso de Bucaram, en Ecuador.

El principal actor fue su hermano mayor, Raúl, quien ha removido la conciencia social del país. Su palmarés es impresionante: sus manos no están limpias del asesinato del hermano del procurador y dirigente del PRI, José Francisco Ruiz Massieu; hizo negocios oscuros a la sombra del hermano presidente (algunos dicen que con su consentimiento) y se le acusa de enriquecimiento ilícito y de mantener conexiones con el narcotráfico.

Un capítulo especial está en la entrega de compañías públicas, como la compañía de teléfonos de México, Televisión Artece, compañías mineras, bancos (Cremi-Unión, Ban País y otros) al círculo de amigos de la red Salinas, como confirma la ligazón entre Raúl Salinas y Ricardo Salinas Pliego en la entrega de TV Artece, en nombre de la privatización para dinamizar la economía. “Lo único que se dinamizó realmente fue la transformación de riqueza pública en riqueza privada, mediante los peores procedimientos que nada tuvieron que ver con el mercado ni con la libre competencia”.⁵⁰

La revista Proceso, en febrero de 1997, difundió copias del informe del FBI y DEA que “implicaba a los Salinas, a su ex cuñado, José Ruiz Massieu (asesinado) y a Luis Donaldo Colosio, en operaciones de narcotráfico. Raúl Salinas Lozano, (padre) sería cabeza de una agrupación de la que forman parte sus hijos Carlos, Raúl y Adriana, protegidos por el ex-Subprocurador General de la República, Mario Ruiz Massieu, preso en EEUU”.

50 Cox News Services, “Un asunto de ética: corrupción y privatización”, 1995

En abril de 1997, Fiscales mexicanos divulgaron evidencias de que el ex-presidente Carlos Salinas de Gortari, tomó parte en un encubrimiento del papel por el cual su hermano fue acusado de haber participado en un asesinato político en 1994. El Fiscal especial dijo que, según un nuevo testimonio, el ex-presidente fue oficialmente informado desde el principio que el nombre de su hermano mayor había surgido repetidamente en la investigación del asesinato a balazos de un prominente político. Unos días después del crimen, Carlos Salinas convocó a una reunión en el Palacio Presidencial a su hermano Raúl, y al Procurador General Mexicano, y en esa junta, Raúl Salinas pidió que se le mantuviera al margen de la pesquisa, según el testimonio. Raúl Salinas que había estado en el umbral del colapso, es acusado de haber sido el autor intelectual del asesinato.

Carlos Salinas, ha sostenido que durante su Presidencia no se enteró de la mayor parte de los negocios y operaciones personales de su hermano. Recientemente, ha preferido mantenerse callado en lugar de defender a su hermano contra acusaciones crecientes de peculado y fraude. Aunque posteriormente reconoció que Mario Ruiz Massieu, le dijo poco después de iniciar la investigación que el nombre de Raúl Salinas había sido mencionado más de una ocasión en relación con el crimen.

En el curso de las acusaciones, que llevan a la cárcel a Raúl Salinas, se implica también a Mario Ruiz Massieu, a quien se acusa de “ocultar información”. Mario Ruiz Massieu fue en 1994 Subprocurador de la República y hermano del asesinado Secretario General del PRI. A raíz del asesinato, fue nombrado por el Presidente Salinas, “fiscal especial”, encargado de investigar el asesinato de su hermano.

El último trimestre de 1994, este fiscal tuvo un papel protagónico en la trinidad “política-delito-crisis” que agobia al sistema político mexicano por lo menos desde enero de 1994 hasta la fecha⁵¹. Mario Ruiz Massieu acusó a los principales dirigentes

51 Revista SITUACION LATINOAMERICANA, # 24.

priístas de obstruir su investigación y, de hecho, puso en el banquillo de los acusados en el tribunal de la opinión pública, al sistema que tiene como eje la relación PRI-Presidencia. En ese tribunal lo acompañaron cientos de voces y plumas de informadores y comentaristas que potenciaron la sensación dentro y fuera de México, de que la crisis de la política azteca no tendría remedio pronto.

Para observadores y analistas de México y los Estados Unidos, el affaire Ruiz Massieu fue la gota que derramó el vaso de la galopante desconfianza financiera que había arrancado con el asesinato de Colosio en marzo de 1994, se había controlado a un alto costo hasta septiembre de ese año y se precipitó como tormenta cambiaria en diciembre.

Las derivaciones de los irresueltos asesinatos de Colosio y Ruiz de Massieu, no pueden escindirse del binomio política-delito.⁵²

Las acusaciones van también por el lado de las responsabilidades de Salinas para el desate de la crisis financiera en diciembre del 94 y que llevaron al descalabro del peso mexicano.

Crisis económica y social

El 1° de enero de 1994 es una fecha clave en la historia actual de México. Ese día entró en vigencia el Tratado de Libre Comercio (TLC) que integraba a México en un acuerdo económico con Estados Unidos y Canadá. Este Tratado era el símbolo de la incorporación de México al Primer Mundo, había sido aprobado el 17 de noviembre de 1993 por el Congreso de los Estados Unidos. El gobierno de Salinas lo presentó como la culminación de la utopía del cambio propuesto por “el camino mexicano de la transformación económica”.⁵³ El TLC tuvo un efecto simbólico para ratificar la certidumbre del camino elegido.

52 BALLEEN Rafael, *Corrupción política*, Editorial Acrópolis, Bogotá, 1994.

53 Título del libro publicado por Pedro ASPE, Fondo de cultura económica, México, 1993.

Sin embargo, en esa misma fecha irrumpe el denominado Ejército Zapatista de Liberación Nacional, movimiento guerrillero que toma el nombre del legendario campesino Emiliano Zapata de comienzos del siglo XX. Surge en el Sur, en el Estado de Chiapas, con una población mayoritariamente indígena y con niveles de pobreza y marginación alarmantes. Se destapa la visión del Norte próspero y el mísero Sur y golpea la certeza del modelo económico y político.

“Al llegar 1994, la guerra indígena-campesina de Chiapas se convirtió en el episodio extraordinario más importante del país en varias décadas... Fue un catalizador de todas las críticas al salinismo, al modelo económico, al empobrecimiento creciente de amplios sectores mexicanos y a la falta de una reforma política de fondo”.⁵⁴

El problema de Chiapas no es social sino político. La aparición de la guerrilla, por efímera que pueda resultar, significa que existen mexicanos que no creen en la vía electoral para canalizar sus demandas. Ya se sabía: encuesta tras encuesta indican que más de la mitad de los votantes no creen en la limpieza de los procesos electorales.

Aquí reside el problema central de la corrupción política en México: se instituye un régimen basado en el fraude y el autoritarismo. Salinas realiza algunas reformas parciales del sistema electoral y abre un espacio a la oposición, pero bajo el objetivo de mantenerle controlada. Luis Donaldo Colosio intentará un acuerdo con la oposición política para profundizar las reformas del sistema político; pero este proceso se trunca por su asesinato en marzo de ese año. El sexenio de Salinas se ubica en medio de una crisis de transición desde un modelo autoritario de control del poder por el PRI, que se agota, hacia una apertura democrática. La corrupción y la violencia política forman parte de esa crisis, como herencia del pasado y como proyección.

54 AZIZ, Nassiff, Op. cit. . p. 62

En la crisis se combina el fracaso económico con la corrupción. Se articulan varios procesos, internos y externos, que desembocan en el dominio de un capital financiero especulativo. Finalmente en diciembre del 94 estalla la burbuja financiera. Esa es otra historia.

El estallido de la crisis económica en diciembre de 1994, y el caso de encarcelamiento del hermano mayor de Carlos Salinas, junto con el escándalo de corrupción que se empezó a descubrir poco a poco, así como las condiciones en que el ex-presidente salió del país, fijaron en la opinión pública -y en el sentido popular- una imagen completamente negativa del sexenio y del presidente... Se puede afirmar que el repudio en contra de Salinas fue peor que el que tuvieron Echeverría y López Portillo⁵⁵.

Epílogo

Dos factores permiten dar continuidad a las investigaciones sobre la red Salinas. La participación de una fuerza política de oposición, el PRD que inicia el proceso. Y el interés del gobierno norteamericano por contener el narcotráfico desde México.

El 20 de enero de 1999, el Juez Ricardo Ojeda Bohórquez, impuso una sentencia de 50 años contra Raúl Salinas de Gortari, como autor intelectual del homicidio de José Francisco Ruiz Massieu. Raúl Salinas purga su condena en la cárcel de máxima seguridad de Almoloya de Juárez.

ABDALÁ BUCARAM Y LAS JORNADAS DE FEBRERO DEL 97

El ascenso al poder

Abdalá Bucaram logra combinar el apoyo de los poderosos sectores importadores con el apoyo de los sectores marginales urbanos y rurales.

55 AZIZ, Nassiff, Op. cit. . p. 61

Con un estilo político enraizado en la tradición populista costeña y un discurso que maneja con audacia y sin limitaciones y que transforma en imágenes asequibles a las masas, sus creencias, tradiciones y aficiones, Abdalá Bucaram asciende al poder, gracias al voto de sectores sociales ahogados en la pobreza que han ido sufriendo frustraciones y engaños sucesivos, y esperan un salvador. Logra manejar la cultura política de la Costa y abre puentes hacia los sectores marginados de la Sierra. Se suman quienes consideran que no se puede votar por Jaime Nebot, candidato social cristiano, pues no se habían olvidado de la represión, autoritarismo y corrupción del gobierno de León Febres Cordero, algunos más votan con amargura, sobre la convicción de que el gobierno de Bucaram llevaría al país, al fondo de la crisis, con la inevitable consecuencia de que una vez allí, solo cabía que “*o nos salvamos o nos rejodemos*”, como se rumoreaba en todos los corrillos y se acabó por convertir en consigna en las paredes de las ciudades.

El discurso político de Bucaram, había mantenido siempre como su núcleo básico, la oposición pueblo-oligarquía, sin embargo, a medida que se desarrollaba la campaña, fue sugiriendo una radicalización adoptando una retórica que guardaba similitudes con las ideologías de izquierda. Este discurso se modifica cuando es gobierno, la coalición de poder que lo acompaña procura definirse como un gobierno de concertación, sobre la base del PRE, de dos pequeños partidos el APRE y el LN y un movimiento liderado por Rosalía Arteaga, el MIRA, a los que se habían agregado acuerdos con sectores populares, que luego fueron rotos con rapidez y sin consideraciones.

De una campaña electoral plagada de promesas exageradas y sugestivas ofertas de contrariar las políticas neoliberales, Bucaram pasa a la ejecución de todo lo contrario, marcha hacia una política de ajuste basada en la reducción y privatización del Estado y en la intención de acelerados procesos de desestructuración de sectores sociales, principalmente sindicales. En lo económico, su bandera es la convertibilidad económica. Se rodea de un cír-

culo íntimo de poder, formado por sus familiares más cercanos y una cúpula de empresarios cuyas fortunas de dudosos orígenes, les otorga una cohesión con más características de complicidad, caracterizada por la ausencia absoluta de escrúpulos.

Busca el respaldo internacional de figuras como el argentino, Domingo Cavallo, ex-ministro de economía, acusado de procesos de fraude sobre todo en la formación de aduanas paralelas en su país, pero con un fuerte discurso de modernización, basada en la implantación del sistema de convertibilidad.

En la política ecuatoriana, habían dominado los grupos oligárquicos con estrechas vinculaciones entre sí, con restricciones para el acceso de nuevos ricos ajenos a su clase. La opción populista que significa el PRE involucra entusiastamente a grupos monopólicos financieros que se han consolidado en medio del avance del capital especulativo, sectores monopólicos emergentes provenientes del comercio de importación, los que mediante el contrabando y otras artes, han logrado acumular importantes fortunas y desean establecer un nexo fluido entre sus intereses privados y los intereses públicos. Usarían sin intermediarios el poder político como palanca de acumulación de capital. La “Fuerza de los pobres” llega al poder representando la articulación de grupos económicos con sectores populares animados por las ofertas demagógicas.

Este carácter de fuerza que no ha podido acceder directamente a la conducción del Estado, le llevará a tratar de utilizar la administración pública para acelerar la concentración y reacumulación de riqueza en manos de su grupo, con formas extremas de corrupción y autoritarismo.

La estrategia de la corrupción

La corrupción cobra un nuevo carácter cuando es asumida desde la cabeza del gobierno cuando los grupos de poder la ejercen directamente, sin intermediación de “funcionarios profesiona-

les”. Este tiempo se abre con más claridad en nuestro país a partir del gobierno de Sixto Durán Ballén.

Como en muchas otras realidades latinoamericanas de corrupción, el esquema es el mismo. El gobernante es el eje alrededor del cual se realizan los actos corruptos. Se teje una red que agrupa a familiares y representantes de grupos económicos.

La familia Bucaram se instala en el poder, conformando la plana básica de un equipo en el cual constan los representantes de los grupos económicos emergentes, que veían llegada su hora. Los negocios del Estado verdaderamente rentables deben pasar a manos privadas, es toda la capacidad económica estatal puesta al alcance.

En estas áreas son colocados los empresarios, del grupo de socios de Bucaram. La estrategia es situar a los hombres de absoluta confianza en los cargos claves relacionados con las privatizaciones, a ellos se les otorga una “encomienda” sin más límites que el reparto “adecuado” de beneficios, la lógica del gobierno fue la de entregar las grandes empresas a los grupos económicos y monopólicos que le apoyaron: Isaías, Alvaro Noboa, Adum, Peñafiel y Bucaram-Salem. Alfredo Adum Ziadé, dueño de una fortuna considerable surgida a propósito del contrabando, es encargado de la administración del petróleo y la energía eléctrica. A su familia encarga la organización de entes paralelos de control y administración de las áreas de rentabilidad inmediata, así es como fue público y notorio que el hijo del Presidente, Jacobo Bucaram, se encargaba de administrar el negocio aduanero para lo cual estableció una red paralela a la oficial, con tan pingües resultados que poco antes de la caída de su padre festejaba por todo lo alto, su primer millón de dólares.

Desde el inicio de su vida política, cuando ejerce la Intendencia de Policía del Guayas, Abdalá Bucaram, hace gala de una actitud moralista. En 1979 publica “Los dieciséis mandamientos de Abdalá”, mesiánicamente propone un código moral, en el que condena el alcoholismo, prohíbe orinarse en público, llevar mi-

nifalda, entre otros temas inconexos como el control de precios y el respeto y exaltación a la madre y a la Virgen María. Ya entonces y luego en todo momento, este pseudo moralismo se contradice con la acción. Cuando gobernante no solamente que hay contradicción, sino aprovechamiento en beneficio de su círculo. Mientras se invoca la moral a su amparo se realizan jugosos negocios privados que la contradecían.

Es así como a algunos de sus íntimos, les otorga beneficios circunstanciales pero lo suficientemente jugosos, con el inocente arbitrio de realizar gestos públicos moralistas que conocidos a tiempo por los cómplices, son aprovechados, como en el caso de la propuesta en diciembre de la elevación del ICE (Impuesto a los consumos especiales) entre los cuales el impuesto a la cerveza nacional al 300%, cuando su amigo Eduardo Azar ya había realizado cuantiosas importaciones de cerveza en cantidad más que suficiente para inundar el mercado.

Las tácticas quedaban en manos de los “encomenderos”. Así por ejemplo el Ministro de Energía Adum, quien hacía gala de prepotencia y abuso de poder, aparte de patanería y amoralidad, esbozó una táctica de desestructuración de las organizaciones sindicales y en una típica maniobra trató de convertirse en el adalid de una lucha pseudomoralizante en la que los dirigentes sindicales eran perseguidos por supuestas inmoralidades: el pícaro audaz que se adelanta en la jugada y ataca al contrario acusándolo de realizar aquello que constituyen sus propias debilidades. Aunque es interesante observar la capacidad para legitimar a posteriori estos actos, en un difícil jugo de relaciones de poder.

En el más alto nivel del poder, se busca mantener los asuntos de fondo en la oscuridad, aprovechando para ello sus habilidades histriónicas y recurriendo al espectáculo y la representación como medio vinculante con las masas que por otro lado, también servía como distractivo de sus verdaderos propósitos y su accionar real, con la novedad de que el populismo de Abdalá “tiene que ganarse la audiencia con el sudor de su frente. No hay sustento social permanente” como acertadamente señala Javier Ponce, en “Crónica de un Sarcasmo en trece sábados”.

A la convertibilidad económica se le da el carácter de arma de lucha contra la oligarquía, mientras que con la farándula antagoniza con la cultura ilustrada.

La administración de Abdalá convirtió a la corrupción en norma de gobierno. No se trata de un problema de locura personal. Bucaram representa una forma de acumulación de capital ligada al capital financiero-importador que, a pesar de participar en el poder, no había podido asumir la conducción del Gobierno. Requería del poder para acelerar la acumulación en competencia con el capital tradicional. Por ello, la corrupción adopta una forma cínica y violenta.

Los focos de corrupción se centraron en los puntos de manejo de los dineros públicos: gastos reservados, aduanas, política energética (hidrocarburos y electricidad), administración tributaria. Sin embargo, la novedad estaba en la velocidad de la acumulación y en el cinismo. Un hecho gráfica esta actitud: la Teletón navideña en diciembre del 96, en donde se combina la utilización del discurso de la pobreza con la presión desde el poder para las donaciones y el manejo sin control de los fondos recaudados.

La corrupción cínica y el autoritarismo merman la legitimidad del Gobierno de Bucaram. Cuando se combinan con el paquete de ajustes para preparar el proyecto de convertibilidad, se constituyen en el detonante del levantamiento cívico de febrero. Allí confluyen también los intereses de la vieja clase política que veía en Bucaram a un competidor al interior del propio bloque dominante.

Las jornadas de febrero

La crisis política presente en el Ecuador a lo largo de los años 90, llega a su punto culminante en 1997: “se produce un quiebre del sistema (político), que evidencia no solamente las fallas estructurales de su ensamblaje jurídico, sino algo más: su incapa-

ciudad para mediar en los conflictos y reducir la complejidad de una economía y una sociedad cuyos problemas tendían a agudizarse crecientemente”.⁵⁶

Esta incapacidad del sistema político desplaza el espacio de resolución hacia la participación de la sociedad civil. El 5 y 6 de febrero de 1997 se movilizaron alrededor de 3 millones de ciudadanos (1 de cada 4 ecuatorianos), para demandar la salida del presidente Bucaram. La movilización tuvo un alto componente cívico, con participación de todos los sectores ciudadanos y sociales. Bucaram es depuesto por la movilización cívica; pero la resolución de la crisis es asumida por la institucionalidad, a través del Congreso.

Hay que distinguir tres momentos:

1. La movilización de los actores sociales, que sirve de preparación a las jornadas de febrero. El desgaste del Gobierno de Bucaram.
2. La movilización cívica: 5y 6 de febrero.
3. El desenlace: las negociaciones lideradas por el Congreso y los partidos políticos y la posesión de Alarcón: 7 - 11 de febrero.

El Gobierno de Bucaram se mueve en dos ejes: acelerar la acumulación en torno al capital financiero-importador y legitimar el modelo de convertibilidad, como forma de vinculación con el mercado mundial. Esta doble dinámica se asienta en la actuación al margen de la normatividad, que irá tomando la forma de actos de corrupción cada vez más abiertos y de una política autoritaria sobre todo frente a los actores sociales, mientras busca transar con el Partido Social Cristiano.

Inicialmente los movimientos sociales buscan negociar con el gobierno de Bucaram. Sin embargo, éste demanda compensa-

⁵⁶ ECHEVERRIA, Julio, “*La democracia bloqueada. Teoría y crisis del sistema político ecuatoriano*”, Letras Editores, Quito, 1997.

ciones políticas que afectan el desarrollo del proyecto político de los actores sociales, sobre todo en torno al Movimiento Pachakutik-Nuevo País. El autoritarismo y la corrupción empiezan a encontrar resistencia en la acción de los movimientos sociales y en el reclamo de algunos medios de comunicación.

El país empieza a demostrar signos de malestar. Ya en los últimos meses de 1996 se producen manifestaciones esporádicas de irritación social. La situación inmediata anterior de corrupción gubernamental protagonizada por Sixto Durán Ballén y su familia, había dejado la secuela de una gran abulia y quemeimportismo. Por otra parte conocidas las características de desenfreno, megalomanía y arbitrariedad de Bucaram, no son pocos los que mantienen distintos grados de temor y miedo, que por otra parte, resultaban justificados si recordamos las actitudes de su hombre clave, el Ministro Adum, que se gana el sobrenombre de “Cromagnon”, por los ataques contra los empleados públicos, las mujeres y los periodistas.

El 1° de diciembre, Abadalá Bucaram presenta al país el programa de convertibilidad, acompañado del ex-ministro de economía de Argentina, Domingo Cavallo. Empieza a perder fuerza el impacto de la tarima y el espectáculo.

Las clases altas, empiezan a demostrarse ofendidas por los modales y groserías del gobernante y sus áulicos, su cultura y buena educación no pueden soportar que alguien de tal vulgaridad gobierne el país.

La corrupción, como una realidad ejecutada desde el más alto nivel del poder, en la que se demostraban comprometidas su familia y sus principales colaboradores, crearon un clima de profunda indignación en la ciudadanía. Bucaram no se inmutó ante las críticas que denunciaban los abusos de sus familiares y financistas de campaña, que actuaban bajo el convencimiento de que las altas funciones que ocupaban no eran diferentes de las empresas privadas que habían administrado hasta entonces y

que los métodos inmorales a los que estaban acostumbrados para incrementar sus patrimonios habían encontrado la oportunidad propicia.

La situación va *in crescendo*. Los escándalos de inmoralidades manifiestas se suceden, la Ministra de Educación, Sandra Correa, es acusada de plagio intelectual y apropiamiento indebido del título de doctora en jurisprudencia y se la involucra en el caso de la “mochila escolar”. El caso de la “Teletón navideña” muestra el cinismo y el autoritarismo de Bucaram y su grupo.

El equipo económico, conformado por hombres que solo se mueven por el dinero, había preparado un esquema económico que ni los más recalcitrantes y fanáticos neoliberales lo hubieran propuesto. El 8 de enero, Bucaram toma las medidas económicas sugeridas: elimina los subsidios a los servicios básicos, transporte, electricidad, telefonía, eleva el precio del gas de uso doméstico, reduce el incremento de remuneraciones, se pronuncia radicalmente por las privatizaciones. Ello conduce a que las movilizaciones estudiantiles sean cada vez más frecuentes y que la resistencia de los trabajadores públicos, sobre todo energéticos, empiece a encontrar eco en otros sectores sociales.

El 16 y 17 de enero, los indígenas derrotan el esfuerzo desintegrador y divisionista del gobierno en la CONAIE. El 18 de enero, se constituye el Frente Patriótico con la participación de la Coordinadora de Movimientos Sociales, el Frente de Nacionalidades Indígenas y organizaciones campesinas, la Coordinadora Política de Mujeres, el Frente Ecuatoriano de Derechos Humanos, el Frente Unitario de Trabajadores y el Frente Popular. Se decide una movilización general para el 29 de enero y un paro cívico para el 5 de Febrero. La popularidad de Bucaram desciende a niveles bajos en extremo. Había empezado con el respaldo más alto que ha registrado un presidente al iniciar su período (69%); pero para enero del 97, el índice desciende al 15%.⁵⁷

57 CEDATOS, Ecuador Debate, Nº 416, abril de 1999

La Embajada norteamericana se enfrenta a un agudo dilema. Se había pronunciado oportunamente en defensa del “mejor” programa económico del Continente, pero percibe el creciente descontento social y el concomitante desgaste de Bucaram. Ha llegado el momento de denunciar la corrupción del bucaramato: el 29 de Enero en la ciudad de Cuenca, el Embajador norteamericano hace pública su posición denunciando las presiones que se ejercen sobre empresarios interesados en contratos millonarios de dólares. Con estas denuncias, se alinean rápidamente las cámaras de la producción, el empresariado y los partidos políticos que los representan.

El anuncio de un paquete de medidas de ajuste provoca una reacción generalizada y enciende la preparación de un paro nacional para demandar la “rectificación de las medidas”. A pesar de que se mueve todavía en el plano de la exigencia al gobierno y no en el de su destitución; a partir de ese momento la lucha pasa de las demandas sectoriales y empieza a proyectarse en el ámbito nacional.

Al mismo tiempo, la aceleración de la concentración de la riqueza en manos del sector financiero-importador desde la acción del gobierno, choca con el control mantenido desde el sector financiero-exportador, representado por el Partido Social Cristiano.

Estos dos procesos empiezan a confluir. En este sentido puede hablarse de un acuerdo, una concertación en la oposición al gobierno entre los actores sociales organizados y las élites partidarias, encabezadas por el Partido Social Cristiano, y la Democracia Popular-Frente Nacional. Sin embargo, en ningún momento se realiza una concertación en positivo, en torno a las salidas de la crisis.

Durante los dos primeros momentos la iniciativa está en el campo popular, estructurado en torno al Frente Patriótico. Desde allí se busca una concertación amplia para la destitución de Bucaram.

El punto culminante de la fase preparatoria es la reunión convocada por la Coordinadora de Movimientos Sociales el 3 de febrero,⁵⁸ a la que acuden los representantes de todos los sectores políticos y que concluye con un respaldo a la convocatoria al paro nacional del 5 de febrero. Se intenta conformar una comisión con la participación de cinco representantes de los movimientos sociales y cinco representantes de los bloques parlamentarios encargada de las decisiones después de la salida de Bucaram. El fracaso de este intento llevará a que el desenlace se desplace hacia el Congreso Nacional, bajo una mayoría controlada por el Partido Social Cristiano y la Democracia Popular.

El acuerdo, por tanto, se expresa en torno al rechazo a las formas extremas del gobierno de Bucaram: la corrupción y el autoritarismo; pero no hay una confluencia en cuanto a la propuesta del Mandato presentado por el Frente Patriótico ante el Congreso, el 5 de febrero.

La lucha contra la corrupción se ha convertido en América Latina en el marco para un reordenamiento del bloque gobernante: la participación ciudadana puede ser contenida en el límite de los intentos de avanzar hacia la estructuración de un nuevo marco jurídico, la participación en la elaboración de nuevas normas. La resolución se da en una especie de enroque que bloquea las posibilidades de un cambio: Cardoso por Collor de Melo en Brasil; Alarcón por Bucaram en Ecuador.

La confluencia se va ampliando. Con la toma de la Catedral de Quito por la Coordinadora de Movimientos Sociales, el 29 de enero, se inicia un viraje en el carácter del paro: pasa de la exigencia de derogatoria de las medidas a exigencia de la salida de Bucaram. Las fuerzas políticas entran a respaldar abiertamente el paro, el 3 de febrero.

El 5 de febrero se inicia la movilización y el Frente Patriótico presenta el Mandato y exige la convocatoria a un Congreso ex-

⁵⁸ Para un seguimiento de los acontecimientos ver: NARVAEZ, Iván y otros "5 de febrero: la revolución de las conciencias", FETRAPEC, Quito, 1997.

traordinario para legalizar la salida de Bucaram. Alarcón se suma a la convocatoria a Congreso extraordinario el 5 de febrero en la tarde, pues hasta allí había venido actuando como aliado y soporte del régimen, con lo cual se conforma una mayoría parlamentaria controlada por el eje PSC- DP-FRA⁵⁹.

Un desenlace controlado

Así pues, en los dos primeros momentos de protagonismo social, las fuerzas políticas orientan su acción a empujar la movilización cívica y a respaldar la actuación de los movimientos sociales. Pero inmediatamente buscan controlar el proceso desde la acción parlamentaria. Este control está dirigido no sólo frente a la movilización ciudadana, sino también ante las presiones de las Fuerzas Armadas y la Embajada Americana por orientar el desenlace en favor de la Vicepresidenta Rosalía Arteaga.

Este paso desde la movilización ciudadana a la resolución institucional, marca el límite de la posibilidad de concertación. En nuestro país se ha ido acumulando una “cultura del conflicto (que) determina el comportamiento de los diferentes actores políticos, (con lo que) se torna difícil, y a veces imposible, la búsqueda y el encuentro de consensos indispensables en el ejercicio del poder democrático”.⁶⁰

La participación ciudadana de febrero es vista como un peligro, que tiene que ser encausado hacia la resolución institucional. El desenlace muestra el carácter de las jornadas de febrero: más que una sublevación popular, es un signo de la crisis política del sistema. A pesar de la movilización masiva, no existió un programa y una cabeza que oriente el proceso en su conjunto. La fuerza inicial liderada por los actores sociales organizados es rápidamente absorbida por la institucionalidad y el sistema de partidos.

59 Cronología de los hechos: Diarios Hoy y El Comercio de Quito, enero-febrero 1997

60 Hurtado, Oswaldo, et al., “Ecuador: un problema de gobernabilidad”, CORDES, Quito, 1996.

La distancia que media entre las jornadas del 5 y 6 de febrero y el desenlace del 11 de febrero, con la posesión de Fabián Alarcón en la Presidencia, marca la distancia entre el funcionamiento de una democracia formal que, a pesar de su desgaste logra la recomposición de la gobernabilidad y la apertura de una democracia material, participativa, para sentar nuevas bases normativas. Muestra el paso desde el acuerdo cívico general a un encauzamiento institucional que será controlado progresivamente por los partidos políticos.

En este distanciamiento juegan también los demás actores poderosos: las Fuerzas Armadas mantienen el orden y evitan un enfrentamiento con las movilizaciones cívicas; lo que permitirá una salida institucional. Sin embargo, en alianza con la Embajada Americana, buscan la entrega de la Presidencia a favor de Rosalía Arteaga. Esto provoca un interim entre la movilización y el desenlace, que es aprovechado por los partidos políticos para un desenlace controlado.

De la legitimidad a la gobernabilidad

La resolución del Congreso muestra la combinación de intereses: recoge el mandato general de la destitución de Bucaram, contenido fundamental de la movilización de febrero. Impone la nominación de Alarcón como Presidente Interino, sobre la base de la alianza PSC-DP-Frente Radical Alfarista. Admite el enunciado del Mandato presentado por el Frente Patriótico: castigo a la corrupción, reposición de los derechos sindicales afectados por el bucaratismo, defensa de las áreas estratégicas de la economía, convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente.

A pesar de los esfuerzos del Parlamento, la resolución de la crisis política se da fuera del marco constitucional "normal". Se opera una interpretación forzada del Artículo 100 de la Constitución, para descalificar a Bucaram por incapacidad mental. Por ello, el Gobierno interino nace con dos flancos de debilidad en su legitimidad: la apropiación del mandato cívico que empujó

la salida de Bucaram, pero no impulsó la entrada de Alarcón; y la endeblez del fundamento legal.

A raíz de la movilización de febrero se abre un período de acuerdos entre las funciones del Estado y las voces de la ciudadanía y los actores sociales organizados.

Se avanza en la lucha contra la corrupción política: se logra en parte la autodepuración del Congreso, con la descalificación de 17 diputados involucrados en actos de corrupción y se inician los procesos judiciales en contra de Bucaram. En esta lucha se opera una nueva concertación en la que participan los movimientos sociales, los medios de comunicación y las fuerzas políticas. La lucha contra la corrupción es una lucha contra el poder: y en este período aún funciona el acuerdo para desmontar la fuerza del bucaramismo. Es posible un acuerdo para luchar contra la corrupción del “otro”.

Como parte de este acuerdo el Ejecutivo y el Legislativo crean la Comisión Anticorrupción, con representantes de diferentes sectores de la sociedad civil.

El 5 y 6 de febrero de 1997 no fueron tanto el signo de una sublevación ciudadana, sino el signo de una crisis de hegemonía del bloque dominante. Fracasa el tercer intento de legitimación de un modelo neoliberal integral y de una democracia autoritaria en nuestro país. El primero fue en 1986, con Febres Cordero; desembocó en el Taurazo. El segundo, con Dahik, en 1995, desembocó en el triunfo del NO en el plebiscito y la fuga a Costa Rica.

Sin embargo, la clase política no percibió la profundidad de esta crisis. Levantó el fantasma de Bucaram, para exorcizar el mal del sistema.

La profundidad de la corrupción política es uno de los componentes fundamentales de esa crisis de hegemonía. No es un he-

cho privativo del Gobierno de Bucaram; sino que se prolonga y perfecciona durante el Gobierno de Alarcón. Este desarrolla un doble discurso: ataca la corrupción de Bucaram, encubre su propia corrupción. Un signo es el comportamiento del régimen ante la Comisión Anticorrupción: la crea y la aplaude mientras investiga la corrupción **del otro**, de Bucaram; la ataca y busca suprimirla cuando denuncia la corrupción propia, en los casos del “piponazgo” en el Congreso Nacional y de la “ropa usada”.

Un desenlace controlado desde arriba restablece los cauces del poder con el nombramiento de Fabián Alarcón como Presidente Interino y, por tanto, recorta los alcances de la lucha contra la corrupción. Esta es todavía una tarea inconclusa.